

La hora de los dientes apretados



Por **Lucas Paulinovich**. Fotografía: **Julián Miconi**.

El gobierno se encontró con los primeros síntomas inesperados de "la 125" justo en su décimo aniversario. El sector agroindustrial, con el ministro Miguel Etchevehere a la cabeza, le tira atrás el freno a la quita de retenciones. El gobierno, sediento de dólares, les pasa factura de los beneficios concedidos. El "campo" le suelta a los chinos: el 70 por ciento de las exportaciones al gigante oriental pertenece al sector. Las contraindicaciones del 2008 se le hacen quiste: quedan visibles las consecuencias imprevistas de la alianza del capital financiero y el nuevo empresariado agroindustrial. A la dirigencia agraria no le hizo falta consultar a las bases u otras instancias inferiores, ni siquiera filtrar el debate a la prensa: bastó que se planten los apoderados del Ministerio para tensar todas las relaciones al interior de la alianza Cambiemos. La plata sale de otro lado, el agro no está dispuesto a ser el que la pone. Menos con un escenario de crisis desencadenado por la manía especulativa y el endeudamiento de los otros. Encima la sequía achica los ingresos unos 8 mil millones de dólares. Con la situación cambiaria sin freno, no se acepta marcha atrás: cada uno con lo suyo. Como el patrón maduro, mostraron los dólares, pero lo volvieron a guardar. El llamado a la "patriada" de Carrió no los conmueve. Al proyecto que pretendía el delegado del FMI, Nicolás Dujovne, se lo voltearon a puro lobby, como se resuelven los asuntos internos. Los festejantes de Roberto Cardarelli ¿jefe de la misión para la Argentina del FMI- están seriamente preocupados. Se les nota.

El problema del gobierno con la calle se hace evidente y tiene dos caras. Por un lado, los movimientos sociales y los sindicatos que producen imágenes difíciles que la maquinaria comunicacional de Cambiemos ya no puede procesar. Por el otro, el menos esperado, surgido de su propio sustento político: la Alianza que abrevó en las calles de la 125 y de los cacerolazos no supo conjugar un perfil que pueda contener ese imaginario de protestas en su interior. La concordia de la gobernabilidad se debilita por el "uso indiscriminado" de la hegemonía de los señores de la deuda. Y ahora que necesitan de las divisas agrarias, los paran: "Arréglense con la timba", les dicen. El brete en el que se metió es: o achica el déficit fiscal o achica el costo político. Las consecuencias de las picardías de los jugadores de la Champions League son obvias: crisis para los próximos 20 años, la dificultad para los que vienen. Y tiene, en lo más inmediato, figuras conocidas: desarticulación del tejido industrial, despidos, desocupación, aumento de la pobreza e indigencia, lesión en las capacidades de trabajo y desintegración de vínculos.

La Semana de Mayo fue un compendio de escenarios conflictivos con paros, marcha federal educativa y concentración del 25 en el Obelisco. La consigna "La Patria está en peligro" mostró la intensidad de la resistencia social frente al plan de ajuste. Se suma la Marcha Federal por Pan y Trabajo que cruzó el país la última semana. La brutalidad del ajuste es inadmisibles y la resistencia a las medidas le presenta al equipo de gobierno la disyuntiva sobre cómo administrar la represión. El lema es simple: apretar el cinto y mostrar los dientes. Haciendo gala de un macartismo de western, el Ministerio de Seguridad sacó un "buscado" para Sebastián Romero ¿el militante del mortero durante la represión de las protestas contra la reforma previsional- por un millón de pesos. La cacería de opositores siguió con la detención de los trabajadores Subte: un puntapié para la nueva campaña que intenta asimilar

protesta a piquete y piquete a acción terrorista. Como puntilla leguleya, el anteproyecto de reforma de Código Penal incluye figuras como las de "asociación ilícita terrorista", además de penas para los que arrojen proyectiles contra otras personas, agravadas si esa otra persona lleva uniforme de las fuerzas de seguridad y está en plena acción represiva.

Unos días antes, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, deslizó algunos conceptos del ideario manodurista. "Prefiero que en un lugar que tiene que haber 15 presos haya 30, pero que esos 15 no estén delinquirando", afirmó al referirse a las hacinadas cárceles y comisarías de la provincia, casi como en una oda al incumplimiento de los deberes del Estado. Y a continuación celebró que haya "11 mil presos más que los que teníamos el 10 de diciembre de 2015". Una originalidad alusiva solo superada por el presidente Mauricio Macri en el acto del Día del Ejército en El Palomar, al sugerirles a las tropas "que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado, por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar a los argentinos ante las amenazas y desafíos actuales". A principios de año se constituyó una Fuerza de Despliegue Rápido con las Tres Armas bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Una de esas "nuevas amenazas" designadas era "el avance de grupos violentos mapuches extremistas". El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, justificando las detenciones policiales de los trabajadores del subte, sumó una sutileza a la teoría para extenderla a los que ejercen cualquier tipo de protesta. "Es un delito cortar el transporte público y por eso los metimos presos", discurrió. Y a continuación, sentó la diferencia: "Lo de ayer no fue un paro, fue un piquete". Punto final. El institucionalismo sincrético del gobierno habilita ciertos matices. Por ahí va el leninismo invertido del ministro del FMI que invocó al pragmatismo, etapa superior del gradualismo. Eso es lo que ocurre cuando "el mundo pide que aceleremos".

Como un premio al "manejo de la turbulencia" durante la crisis de financiamiento, Morgan Stanley Capital Investment consideró que -BOTES y salvataje de Black Rock y Templeton Investments de por medio- Argentina está en condiciones de volver a la categoría de "mercado emergente", un ascenso que simplificaría el acceso a nuevas líneas de financiamiento y que se le frustró el año pasado. También espera un buen gesto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que, birrome roja en mano, toma examen y advierte por la "pérdida de confianza" y la "fuga de capitales". "Los dólares que se están yendo son los que nunca debieron entrar", había dicho el asesor Cavallo en pleno barullo de lebac. Durante esos días, las 100 personas que tienen capacidad de compra de más de 5 millones de dólares atesoraron unos 700 millones sin moverse de la silla; la diputada Elisa Carrió llamaba a hacer "inteligencia financiera" para saber quiénes hacían la corrida; y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, debía declarar en una causa donde se lo acusa de cobrar bonos de incentivo diferido del Deutsche Bank porque continúa ejerciendo un trabajo "a tiempo completo indeterminado-trabajo permanente" con una actividad "no clasificada", aunque aclaró que "por cuestiones de delicadeza, se excusa de intervenir" en los expedientes que tratan asuntos del banco.

El arduo esfuerzo para la "normalización" del país cada vez encuentra más escollos. En el transcurso de esas horas álgidas, el Vaticano difundió su "Oeconomicae et pecuniariae quaestiones" donde, como si se dirigiera expresamente al ministro Luis Caputo, condena la riqueza offshore que "ha casi igualado la deuda pública de sus respectivos países" y señaló que "el origen de esa deuda a menudo está en los pasivos económicos generados por privados y luego descargados sobre los hombros del sistema público". En busca de amenazas y nuevos desafíos, el gobierno tiene uno fundamental que le destruye la armonía del sueño: se llama 27 por ciento y tiene el rostro de Pablo Moyano. El llamado a imitar las protestas de los camioneros brasileros y la secuencia de los policías negándose a reprimir y plegándose a los reclamos es un espanto que en la Casa Rosada enloquece a todos. El horizonte que abre el veto express a la ley de tarifas y el reclamo por la reapertura de paritarias es la nota que incomoda y pervierte todos los cálculos para el "equilibrio fiscal". El recubrimiento con retóricas antiterroristas y la equiparación a las agresiones y conspiraciones del terror sirven para la avanzada represiva contra todo foco de oposición.

Las complicaciones surgidas del despilfarro y saqueo financiero se cargan sobre las espaldas de los trabajadores. En un año, la Inversión Extranjera Directa cayó un 63 por ciento. En el 2017, las colocaciones financieras cuadruplicaron el monto de las "lluvias de inversiones": unos 9933 millones de dólares contra 2362 millones. En este marco, al gobierno parecen quedarle pocas hipótesis alentadoras: que la sociedad no quiera una salida a lo 2001 con un final anticipado de un gobierno no peronista; y que siga vigente el antikirchnerismo nodal que permite zarandear la "pesada herencia" y el demonio de Cristina. Aunque el operativo para disuadir al pichettismo de votar la ley de tarifas haya fallado. La caída en el ingreso agrario, el hundimiento de la balanza comercial, la dolarización, el impacto en los precios y la conflictividad social, parecen ser factores que se alinean para desalentar sus esperanzas. El último objetivo es un reencuentro con los viejos aliados enojados para lograr el Gran Acuerdo Nacional del ajuste y reparto de

costos políticos. Ahí fue Luis Caputo a reunirse con la cúpula de la UIA que culminó con una foto emblemática. Pero a los devaluadores no se los convence tan sencillamente cuando todo fue para los bancos y los servicios. Tampoco al peronismo dador de sangre, que no quiere cargar con culpas gratuitamente. El gobierno está desorientado, la Alianza Cambiemos sufrió su primera gran hendidura y los que aportaban dólares y gobernabilidad, se retoban. El "frente social" es ahora la arena de los hechos. Y la única respuesta es apelar al vigor de la fuerza, los uniformes y las persecuciones más o menos policiales. Hasta que Cardarelli mande noticias.